

## &gt; EMERGENCIA ECONÓMICA / La reacción de los partidos

Viene de página 4

actividad fuera del horario lectivo la obtenían los profesores en forma de créditos computables para los complementos salariales asociados a la formación. Es decir, los famosos sexenios, con importes reducidos ahora a la mitad y sin posibilidad de sumar nuevos al menos durante dos años.

De ahí que los Cefire o centros de formación para el profesorado estén también en el punto de mira. Renunciar a sus cursos es otra de las opciones en señal de protesta, al igual que la decisión de los directores de Primaria de suspender buena parte de sus actividades ex-

La consellera Català solo ha prometido pagar esta semana a los institutos

Los centros privados de Educación Infantil reclaman 12 millones de euros

traescolares e incluso excursiones y salidas.

Pero la red pública no es la única ahogada económicamente. Desde la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza privada (Acade), que agrupa a la mayoría de las escuelas infantiles de titularidad privada, se denunció ayer que a partir de febrero habrá cierres y despidos en el sector.

Al menos si los 500 centros no reciben los 12 millones que se les adeuda en concepto de bono escolar de los meses de septiembre a diciembre. «Se ha tenido que hacer frente con recursos propios a todos los gastos generados por el mantenimiento de las escuelas, recibos, costes laborales, manutención de los niños, lo que está llevando a la descapitalización de muchas de estas pequeñas empresas educativas», lamentaron fuentes de Acade. Los cierres son «inminentes».

Viene de página 4

tes llegando a generar, alguna de estas medidas, pérdidas de poder adquisitivo que en algunos supuestos pueden llegar hasta el 11% del salario neto».

Además, advirtió de que estas medidas «pueden ocasionar una merma considerable de la calidad asistencial que reciben los usuarios de la sanidad pública autonómica».

La Organización Colegial Autonómica de Enfermería ofreció su «apoyo y colaboración» a todos los sindicatos del ámbito sanitario para frenar el citado decreto, al tiempo que criticó «el pésimo control de los recursos públicos autonómicos por parte de sus gestores» y rechazó «las medidas y decisiones tomadas por el Consell para los años 2012 y 2013, al no ir éstas dirigidas a lograr una mayor racionalidad y eficacia de la Administración, sino que solo van encaminadas a realizar un importante recorte de los sueldos de los profesionales sanitarios y de sus derechos laborales».

## Blasco pide «disculpas» por subir impuestos

El PP admite que los recortes «van en contra de las convicciones del PP» pero que los ciudadanos los comprenden

M. GASPARET / Valencia

A primeros de noviembre el presidente de la Generalitat sorprendió a propios y ajenos con una petición pública de «disculpas» a los proveedores de la Generalitat por los retrasos en los pagos acordados: con aquella muestra de arrepentimiento el nuevo inquilino del Pa-

los ciudadanos por una medida —la subida de impuestos contemplada en el decreto de los recortes— que no es definitiva, que no estaba en nuestro programa y que hemos tenido que adoptar en contra de nuestras convicciones por la situación tan grave».

No por razonada (o razonable) deja de ser significativa la solicitud de disculpas de Blasco, por dos motivos.

Primero, porque deja en un segundo plano el primer punto del argumentario oficial, según el cual los recortes son consecuencia de los dos puntos de déficit oculto por el anterior Gobierno: 20.000 millones de agujero de los que 2.000 millones corresponderían a la Comunidad.

Y segundo, porque marca de antemano la comparecencia mañana en las Cortes Valencianas del presidente, Alberto Fabra para explicar este decreto y el también recientemente aprobado decreto ley

sobre emprendedores y medidas de estímulo. Si recitó Rafael Blasco el *catón* del PP al asegurar que de haber recibido la financiación autonómica que le corresponde por parte del Estado, la Comunidad Valenciana hubiera percibido 11.500 millones

### PROTESTAS

## 300 funcionarios contra Vela

Alrededor de 300 empleados públicos de la Conselleria de Hacienda se concentró ayer por la mañana en la puerta de la conselleria para exigir la derogación del decreto de recortes y reclamar la dimisión del titular de Hacienda, José Manuel Vela. La concentración fue organizada por parte de los propios trabajadores y al margen de los sindicatos y no se descartan nuevas concentraciones. Por otro lado, los servicios jurídicos de las Cortes Valencianas preparan un informe, a instancias de Compromís, para ver si es legal la aplicación del decreto a los funcionarios del Parlamento. La oposición cree que es una injerencia del ejecutivo en el legislativo.

lau daba carpetazo a la *estrategia del avestruz* con que hasta entonces se abordaba el drama de los vencimientos impagados.

Pues bien, el portavoz parlamentario popular, Rafael Blasco, emuló (y se adelantó) a su jefe de filas con una petición de «disculpas a

sobre emprendedores y medidas de estímulo.

Si recitó Rafael Blasco el *catón* del PP al asegurar que de haber recibido la financiación autonómica que le corresponde por parte del Estado, la Comunidad Valenciana hubiera percibido 11.500 millones



El portavoz del PP, Rafael Blasco, en las Cortes. / BENITO PAJARES

más, y la deuda de los 20.000 millones sería la mitad.

El portavoz popular recordó el arrollador triunfo de su partido en las elecciones generales para concluir que los ciudadanos comprenden la dureza de los recortes y que si votaron al PP fue para que gestionara la salida de la crisis.

La celebración conjunta de ambos debates en el pleno extraordinario de mañana motivó ayer duros reproches por parte de los grupos de la oposición, que tacharon de «operación camuflaje» y de «maniobra de distracción» que el presidente aborde los dos decretos en una sola comparecencia.

La polémica estaba servida desde el momento en que el PP planteó agrupar el debate de los dos decretos en un solo bloque, lo que hubiera limitado en la práctica los tiempos de intervención de los grupos de la oposición. El vicepresidente del Consell, José Ciscar, accedió a que ambos decretos sean debatidos de forma separada, si bien el presidente los expondrá a la vez, toda vez que se trata medidas anticrisis y que su intervención no tiene límite de tiempo. La solución tampoco gustó a la oposición, que tendrá cinco minutos para fijar posición y otros diez para explicar el sentido de su voto en cada caso.

## Malestar en el PP con De León por las protestas ante la casa de Camps

La oposición «entiende» la «respuesta justificadísima» de los ciudadanos y los populares miran a Delegación del Gobierno

M.G.R. / Valencia

Mientras los portavoces de los partidos de la oposición manifestaban ayer su «comprensión» para con el centenar de exaltados que el domingo se concentró frente a la puerta de la vivienda familiar del ex presidente Francisco Camps para increparle, los dirigentes del PP se preguntan «si se trataba de una manifestación autorizada o no autorizada» y mirande reojo a la nueva delegada del Gobierno. ¿Qué hubiéramos dicho si en vez de ser Paula Sánchez de León —ex número dos de Camps— llega a ser la anterior?, se preguntaba ayer un destacado dirigente.

El asunto no es en absoluto menor, toda vez que se trata de la segunda ocasión, en solo tres días, en que el legítimo derecho a la manifestación degenera protestas espontáneas. El viernes pasado un grupo de sindicalistas de enfermería inició una protesta contra los recortes que casi acabó en trifulca: un grupo de descontrolados entró a las bravas en el Palacio de Fuentehermosa y aporreó la puerta de los despachos de miembros del Gobierno. El domingo varias decenas de indignados se colaron en el metro sin pagar en protesta por los recortes, pero la convocatoria acabó lanzando gritos e insultos

cortes, se mostró más que comprensiva con estas actitudes.

Desde el PSPV, la diputada Cristina Moreno dijo que «si fue una protesta violenta, la rechazamos; pero si fue una expresión del malestar ciudadano, lo entendemos».

Desde Compromís, Mònica Oltra adujo que «dentro de cauces pacíficos», entre el derecho a la intimidad y el honor y el derecho de manifestación y a la libertad de expresión «debe prevalecer el derecho de manifestación».

Con todo, Mònica Oltra advirtió «contra la tentación de parte del PP de convertir a Camps en chivo expiatorio».

El popular Rafael Blasco se preguntó si se trataba de una «protesta autorizada» y rechazó la violencia, «aunque sea verbal», contra toda persona.



Paula Sánchez de León. / BENITO PAJARES

frente al domicilio del ex presidente Camps.

La izquierda parlamentaria, en plena disputa por ver qué partido se gana la calle al calor de los re-